TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL-FAMILIA-LABORAL

Magistrado Sustanciador

Luís Alberto Téllez Ruíz

AUTO No 2

San Gil, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Ref. Rad. No. 68-755-3113-002-2019-00010-01

1.- Mediante auto del 7 de octubre de 2021 -notificado en estados del 8 de octubre pasado-, esta Corporación admitió los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de la parte demandante –Diana Marcela Rivera Pérez, Adolfo Rivera Ayala, Ana Lili Pérez Otálora y Marcela Rubio Pérez- y los apoderados judiciales de los demandados -Milton Cesar Martínez Castillo, Transportes Reina S.A, Transportes Alianza S.A, y Transportes La Verde S.A., y el Banco de Occidente- contra la sentencia de fecha once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro, disponiendo a su vez, que, ejecutoriada dicha providencia los recursos debían sustentarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes -art. 14 decreto legislativo 806 de 2020-.

2.- Posteriormente mediante escrito¹ recibido en el correo electrónico de la secretaria de la Sala el apoderado judicial de las entidades demandadas -Transportes Reina S.A, Transportes Alianza S.A, y Transportes La Verde S.A.- solicitó, que, acorde con el art. 327-4 del C.G.P., se decretara como prueba la sentencia del 13 de agosto del 2021 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Socorro, en la cual se condenó a la aquí demandante Diana Marcela Rivera Pérez por el “Delito De Homicidio Culposo” por los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2013, donde falleció la

¹ Memorial del 12 de octubre de 2021. Pdf No 09 de la carpeta del Tribunal.

menor Nikole Yurley Gómez Carrillo, quien se desplazaba en el vehículo de placa HBL-293, situación fáctica que también es objeto del presente litigio.

3.- A su turno, mediante escrito del **13 de octubre de 2021**, la apoderada judicial de la parte demandante, solicitó a esta Corporación lo siguiente “...se adicionen al presente proceso las siguientes pruebas que se decretaron y practicaron en proceso de investigación penal que se adelanta en contra del demandado MILTON CESAR MARTINEZ CASTILLO, pruebas que NO eran de conocimiento público por lo que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor al presente proceso, y tampoco pudieron allegarse al proceso penal que cursó en contra de mi representada la señorita DIANA MARCELA RIVERA PEREZ en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del Socorro – Santander, lo que hubiese cambiado la decisión tomada en dicho proceso, cumpliéndose con ello el requisito previsto en el Art. 327 Num 4: Solicitamos por favor oficiar a la Fiscalía 01 de la Dirección Seccional del Socorro - Santander, señora Fiscal MARIA MARGARITA ESPITIA RIBERO, para que allegue al presente proceso las entrevistas y declaraciones que por orden suya fueron practicadas a algunos de los testigos directos del accidente de tránsito ocurrido el día 14 de diciembre de 2013, quienes son:

- María Fernanda Jiménez Martínez
- Rubí Daniela Martínez Hernández
- Silvia Juliana Chacón Martínez
- Macedonio Jiménez Tamayo
- Carmen Edilia Martínez Hernández.

Las anteriores pruebas se encuentran dentro del expediente con número único de noticia criminal 687556000242202050048, que cursa en contra del demandado MILTON CESAR MARTINEZ CASTILLO”.

CONSIDERACIONES

1.- De conformidad con lo previsto por el artículo 327 del C. G. P., las pruebas en la segunda instancia se decretarán únicamente en los siguientes eventos: “**Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas**, cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto

que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretara únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.

2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.

3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.

5. Si con ellos se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior”.

2.- En el presente asunto, tenemos, que, el a quo mediante auto dictado en audiencia del 6 de diciembre de 2019² decretó como pruebas las siguientes: “(...) **SEGUNDO:** Se dispone librar oficio al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SOCORRO -SANTANDER, para que, acosta de la parte interesada y con destino a esta actuación procesal, se sirva remitir en su original o copia autentica las actuaciones y diligencias o documentación que reposa en su poder y respecto del accidente de transito ocurrido el 14 de diciembre de 2013 en los que resultaron involucrados los vehículos de placas: SKX-623 y HBL-293, cuyo proceso de adelanta bajo el radicado No **687553104002-2017-00071-00 y CUI 6850060001462013-151** por el delito de Homicidio Culposo, siendo partes TRANSPORTES REINA S.A., MILTON CESAR MARTINEZ CASTILLO identificado con la C.C. No 7.315.843, y la señorita DIANA MARCELA RIVERA PEREZ, Por secretaria líbrese el oficio respectivo. **TERCERO:** Se dispone igualmente, librar oficio a la FISCALIA CUARTA SECCIONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SOCORRO para que, acosta de la parte interesada y con destino a esta actuación procesal, se sirva remitir en su original o copia autentica las actuaciones y diligencias o documentación que reposa en su poder y respecto del accidente de tránsito ocurrido el 14 de diciembre de 2013 en los que resultaron involucrados los vehículos de placas: SKX-623 y HBL-293, cuyo proceso de adelanta bajo el **radicado No 687553104002-2017-00071-00 y CUI 6850060001462013-151** por el delito de Homicidio Culposo, siendo partes TRANSPORTES REINA S.A., MILTON CESAR MARTINEZ CASTILLO identificado con la C.C. No 7.315.843, y la señorita DIANA MARCELA RIVERA PEREZ, Por secretaria líbrese el oficio respectivo.”. (Subrayado y negrilla de la Sala).

² Pdf Cuaderno No1, folio 664.

3.- Así las cosas, de entrada aclara la Sala, que, las solicitudes probatorias realizadas **respectivamente** por los apoderados judiciales de la parte **demandante** y las entidades **demandadas** -Transportes Reina S.A, Transportes Alianza S.A, y Transportes La Verde S.A.-, deberán ser denegadas, dado que, en el caso sub-exámene, una vez estudiado el expediente, no se cumple ninguno de los presupuestos aducidos por el -artículo 327 del C. G. P.-, para la procedencia del decreto y práctica de pruebas en la segunda instancia, por las siguientes razones:

3.1.- En lo tocante con la solicitud probatoria de las **entidades demandadas** -Transportes Reina S.A, Transportes Alianza S.A, y Transportes La Verde S.A.- para que esta Corporación: **a.-** Decrete como prueba la sentencia del 13 de agosto del 2021 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Socorro, en la cual se condenó a la aquí demandante Diana Marcela Rivera Pérez por el “Delito De Homicidio Culposo”, es evidente, que, dicha providencia nunca fue decretada como prueba documental, pues la misma por obvias razones de índole cronológico no formó parte de aquellos documentos o piezas del proceso penal, que, se decretaron como pruebas por parte del a quo. Amén de lo anterior, a través de la secretaria de la Sala se pudo corroborar lo siguiente “...se deja constancia en el sentido de indicar que ante la Sala Penal de esta Corporación se tramitó recurso de apelación en contra de la sentencia del 13 de agosto de 2021- proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Socorro, mediante la cual se condenó a DIANA MARCELA RIVERA PÉREZ, por el delito de “Homicidio Culposo” por los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2013, y en la secretaria de la Sala Penal también se informó que la misma fue confirmada por sentencia del 3 de noviembre de 2021, la cual fue objeto de CASACIÓN; razón por la cual el expediente fue remitido a la Sala de Casación Penal de la H Corte Suprema de Justicia el 21 de enero de 2022 y aun al día de hoy, no ha sido devuelto”³, es decir, que, la aludida sentencia penal no se encuentra ejecutoriada, y por ende, -por ahora- ningún efecto jurídico puede producir al interior del presente proceso.

³ PDF No 18 cuaderno del Tribunal.

b.- Ahora bien, respecto de la solicitud de la parte demandante, para que se decreten en segunda instancia, las pruebas documentales correspondientes a las entrevistas prácticas a los señores -María Fernanda Jiménez Martínez, Rubí Daniela Martínez Hernández, Silvia Juliana Chacón Martínez, Macedonio Jiménez Tamayo y Carmen Edilia Martínez Hernández- por parte de la Fiscalía Primera de la Dirección Seccional del Socorro -y que inclusive fueron allegadas por la actora al PDF No 10 de la carpeta del Tribunal-, tal y como se expuso en acápites precedentes, aquellos documentos **son pruebas nuevas**, las cuales tampoco fueron decretados como tales por el a quo, y frente a las cuales dicho sea de paso corresponden a una investigación penal con Código Único de Investigación No **68-755-60-00242-2020-50048**, es decir, es un proceso penal totalmente diferente al que fue decretado como prueba en este asunto, por parte del fallador de primera instancia.

En consecuencia, se,

RESUELVE

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes probatorias incoadas por los apoderados judiciales de la parte **demandante** y las entidades **demandadas** -Transportes Reina S.A, Transportes Alianza S.A, y Transportes La Verde S.A.-.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión ingrese nuevamente el proceso al despacho, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUÍS ALBERTO TÉLLEZ RUÍZ⁴

El Magistrado

⁴ Rad. 2019- 010. El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del decreto legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, por cuya virtud se autoriza la “firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada”.